

# LA ABROGACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ITALIANA SOBRE LOS «CULTI AMMESSI»

## Presentación del Proyecto de Ley ante el Parlamento

María José CIÁURRIZ

*Universidad Nacional de Educación a Distancia*

El 3 de julio de 1997, el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Prodi, presentó ante la Cámara de Diputados un «Disegno di Legge» titulado «Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi»<sup>1</sup>. En el texto oficial de la Presentación de dicho Proyecto de Ley<sup>2</sup>, se señala que el primer ministro actuaba «di concerto» con los ministros del Interior, Instrucción Pública, Finanzas, Trabajo y Previsión Social, y Tesoro, Presupuesto y Programación Económica. Desde un punto de vista general, y también si pensamos en los Ministerios españoles que –por entenderse que poseen competencias al respecto– están representados en nuestra Comisión Asesora de Libertad Religiosa, se echa en falta la participación en el citado concierto al menos de los Ministerios competentes en los campos de la Justicia, Bienes Culturales, Defensa y Sanidad. Pero, en todo caso, la concurrencia de diferentes entidades ministeriales supone, en lo que al Proyecto italiano se refiere, una manifestación de evidente consenso del Gobierno en la materia y un empeño de Estado para afrontar ante la Cámara un tema al que se otorga un señalado relieve.

El presente trabajo se propone ofrecer a los lectores tanto el propio Proyecto de Ley citado, como las palabras de presentación del mismo ante el Parlamento, pronunciadas por el Primer Ministro italiano y a las que acabamos de referirnos. Ambos textos figuran, pues, como apéndice al final de estas páginas. Al efecto, por otra parte, del análisis que aquí realizaremos, nos vamos a limitar a un aspecto muy concreto del Proyecto de Ley: su artículo 40, según el cual «Sono abrogati la legge 24 giugno 1929, n. 1159, ed il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289».

---

<sup>1</sup> El proyecto se encuentra actualmente en trámite de estudio en la correspondiente Comisión parlamentaria.

<sup>2</sup> Incluimos como Apéndices tanto el Discurso ante la Cámara del presidente Prodi como el propio texto del Proyecto legal, que se encuentra en *Atti Parlamentari*, XIII legislatura, donde figura con el núm. 3.947. Puede verse asimismo el Proyecto en *Quaderni di Diritto e Política Ecclesiastica*, 1997/2, pp. 591-601.

Ambos textos legales contienen precisamente la normativa sobre los denominados «culti ammessi», normativa promulgada a raíz del Concordato Lateranense de 1929 y como complemento del mismo; al proclamarse, en virtud del Concordato, el Estado italiano como un Estado confesional que adoptaba el catolicismo como religión oficial, las dos normas sucesivas acogieron en el ordenamiento jurídico italiano, con notables limitaciones desde luego, a las confesiones minoritarias distintas de la Iglesia católica.

Pese a que, al concluir la II Guerra Mundial, Italia cambió de régimen político y entró en vigor una nueva Constitución, el Concordato Lateranense conservó su vigencia, y hasta 1984 no fue sustituido por un nuevo acuerdo con la Iglesia católica. Simultáneamente, se revisaron las relaciones con las confesiones minoritarias, iniciándose una política de «intese» con las mismas que ha despertado desde entonces la general atención de los eclesiasticistas, tanto dentro como fuera de Italia.

Sin embargo, la normativa procedente de los años 1929-1930 sobre el ejercicio de los cultos diversos del católico, denominados entonces, desde la perspectiva de la religión de Estado, «culti ammessi», no ha sido abrogada todavía. Y de este pie parte el presidente Prodi al iniciar ante la Cámara su discurso de presentación del nuevo Proyecto de Ley, el cual, si bien destina la inmensa mayor parte de su articulado a regular la libertad religiosa, y un solo artículo a abrogar la legislación fascista superviviente ya mencionada, concede tanta relevancia a este último hecho que lo menciona en el propio título con el que el Proyecto se presenta al Parlamento: normas sobre la libertad religiosa y abrogación de la legislación sobre los «culti ammessi».

El Presidente comienza haciendo referencia a la importante obra de reforma de la legislación eclesiástica que se efectuó en Italia entre 1984 y 1989, por medio de la cual se revisó el Concordato, se reguló la materia tocante a los entes católicos y a la sustentación del clero, y se establecieron las bases de las «intese», en el marco de un amplio proceso de renovación, aún por concluir, de las relaciones del Estado con las confesiones religiosas. En este panorama considera Prodi que debe insertarse el nuevo Proyecto de Ley, cuyo fin primordial radica en llevar a su pleno desarrollo los principios constitucionales en el campo de la libertad de conciencia, de religión y de creencias, a la par que abrogar la vieja normativa de la época fascista sobre el ejercicio de los cultos no católicos.

Ya el profesor D'Avack había señalado en su momento que la legislación sobre los denominados «culti ammessi» era desde tiempo atrás una legislación superada y que merecía ser abrogada definitivamente<sup>3</sup>. La Asamblea consti-

<sup>3</sup> P. A. D'AVACK, *Trattato di Diritto Ecclesiastico Italiano, Parte Generale*, Seconda Edizione, Milano, 1978, p. 344: «Si tratta pur sempre di una legislazione superata che merita di essere una buona volta abrogata.»

tuyente pudo en su día, en efecto, abrogar dicha legislación, pero optó por dejar esa tarea al legislador ordinario. Y el resultado de tal decisión fue que, durante más de treinta años –D’Avack hacía esta afirmación en 1978; ahora hubiese tenido casi que duplicar esa cifra–, los sucesivos gobiernos democristianos que se sucedieron sin interrupción en el poder mantuvieron inalterada aquella normativa, a la que el gran maestro romano califica no sólo como superada y anacrónica, dados sus principios informadores y las disposiciones que contiene, sino también inconciliable con los postulados democráticos propios del actual Estado italiano <sup>4</sup>. En la misma fecha que D’Avack, Casuscelli señalaba que un motivo de fondo para la falta de actuación de la propia normativa constitucional en relación con los cultos no católicos nacía del empeño de la Administración pública en perseverar en una orientación confesional favorable a la Iglesia católica <sup>5</sup>.

Tal parecer de D’Avack distaba de encontrarse aislado en la doctrina italiana posterior a la Constitución. Anna Ravà, en la relación inaugural del brillante Congreso de Derecho Eclesiástico que se celebró en Siena en 1980, había asimismo insistido en el retraso que venía sufriendo la revisión de la normativa del fascismo en el campo de las relaciones del Estado con las confesiones religiosas <sup>6</sup>. Una parte de la doctrina, como es sabido, hubiese preferido un sistema separatista con todas sus consecuencias, establecido sobre la base de negar al hecho religioso un tratamiento particular fuera de la legislación común <sup>7</sup>; pero, en general, la vía de la revisión de la normativa proveniente del fascismo encontraba un amplio eco, defraudado por el prolongado mantenimiento de una legislación sobre los cultos meramente admitidos que se encontraba, y se encuentra, en abierto contraste con la propia naturaleza del Estado no confesional <sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> P. A. D’AVACK, ob. cit., p. 345: «La decisione programmatica dell’Assemblea costituente di lasciare al legislatore ordinario l’eliminazione della legislazione fascista sulle confessioni non cattoliche ha avuto quale risultato quello di indurre per oltre trenta anni i vari governi democristiani succedutisi ininterrottamente al potere a mantenere inalterata questa legislazione passata non solo superata e anacronistica nei suoi principi informativi e nella sua normativa, ma addirittura inconciliabile con i postulati democratici odierni dello Stato italiano.»

<sup>5</sup> G. CASUSCELLI, «Intese, pluralismo confessionale e partecipazione», en *Le intese tra Stato e confessioni religiose. Problemi e prospettive*, a cura di C. MIRABELLI, Milano, 1978, p. 146.

<sup>6</sup> A. RAVÀ, «Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica», en el volumen del mismo título que contiene las *Atti del II Convegno nazionale di Diritto ecclesiastico, Siena, 27-29 novembre 1980*, Milano, 1981, p. 8.

<sup>7</sup> *Vid.*, por ejemplo, P. BELLINI, «Verso un nuovo laicismo: per una legge comune sul “fatto religioso”», en *Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica*, cit., pp. 166-182.

<sup>8</sup> «Inconciliabile, anzitutto, quale legislazione di uno Stato confessionista in senso cattolico che, mentre proclamava la fede cattolica come la sola religione dello Stato, si limitava poi, se non addirittura a “tollerare”, comunque ad “ammettere” semplicemente la presenza di determinati culti non cattolici e ad ammetterli soltanto in una posizione di spiccata inferiorità formale e sostanziale di fronte alla Chiesa cattolica» (P. A. D’AVACK, ob. cit., p. 345).

La doctrina más reciente ha continuado –como no podía ser menos– insistiendo en la misma línea. Lariccia nos habla de la larga espera que está sufriendo el desarrollo de la Constitución en este campo, en el que considera necesario proceder tanto a la abrogación de la vieja legislación de 1929-1930 como a la aprobación de una nueva ley, la cual provea, en conformidad con los principios constitucionales, a establecer la plena libertad de cultos y conciencia, dando lugar a una completa igualdad de los ciudadanos independientemente de la fe que profesen, lo cual sólo es alcanzable a través de la neutralidad religiosa del Estado <sup>9</sup>.

La legislación actual, pese a que ha ido modificando en sentido positivo la regulación de las relaciones del Estado con las confesiones minoritarias, aún resulta en exceso «difusa» <sup>10</sup>, como fue «triste» y «vergonzosa» la situación de carencia de libertad que según Lariccia caracterizó la vida de las minorías religiosas en los primeros tiempos tras la proclamación de la República <sup>11</sup>; situación que, si ha mejorado ciertamente, adolece aún de la falta de una legislación que abrogue las normas sobre los cultos admitidos, las cuales «limitano la libertà delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e prevedono nei loro confronti discriminazioni contrarie alla costituzione» <sup>12</sup>.

Conformidad, pues, en la doctrina, que es obvio que se refleja en las palabras del presidente Prodi al iniciar su intervención parlamentaria para exponer los propósitos inspiradores del nuevo Proyecto de Ley. Él mismo afirma que la normativa de 1929-1930 se funda no sólo en principios diversos de los que inspiran la Constitución democrática, sino que incluso se encuentra en muchos casos en neto contraste con ella. Consiguientemente, el Proyecto legal propone la abrogación íntegra de aquellas normas, en aplicación de las exigencias que al respecto marca la norma constitucional y que durante ya medio siglo han permanecido ignoradas en parte por el ordenamiento vigente.

A tal efecto, recuerda Prodi que la regla de la bilateralidad, sancionada por los artículos 7.º, segundo párrafo, y 8.º, tercer párrafo, de la Constitución, no agota el sistema de pluralismo confesional diseñado por los constituyentes, tanto en relación con la tutela de aquellos derechos que son inviolables incluso en la esfera interna de las confesiones, como en lo que hace a los derechos previstos en los artículos 17, 18 y 19 de la Constitución, y a la libertad de las asociaciones e instituciones con fines religiosos o culturales, de las que se ocupa el artículo 20 constitucional.

<sup>9</sup> S. LARICCIA, *Diritto Ecclesiastico*, terza edizione, Padova 1986, p. 358.

<sup>10</sup> *Vid.* G. B. VARNIER, «Le problematiche del rapporto Stato-Minoranze confessionali», en *Normativa ed Organizzazione delle minoranze confessionali in Italia*, a cura di V. PARLATO e G. B. VARNIER, Torino, 1992, p. 3.

<sup>11</sup> S. LARICCIA, *ob. cit.*, p. 358.

<sup>12</sup> S. LARICCIA, *ob. cit.*, pp. 358-359.

No sería posible –subraya el presidente del Consejo– reservar a la negociación legislativa con las confesiones la reglamentación de los intereses que tocan a la generalidad de los ciudadanos, así como de aquellas materias que o no afectan o no se agotan en las relaciones entre el Estado y las confesiones. La propia abrogación de la normativa fascista no puede acometerse sectorialmente en la citada negociación con aquéllas, y debe ser objeto de una Ley dictada al efecto por el poder legislativo en la línea del Proyecto ahora presentado a la Cámara.

También la doctrina ha señalado al propósito la oportunidad del camino pacticio para abrir vía a las confesiones distintas de la católica, en aplicación del artículo 8.º de la Constitución, a la par que la imposibilidad de encerrar en esta medida el tratamiento del fenómeno religioso de carácter asociativo. Como recuerda Vitale, el citado artículo 8.º establece que también con las confesiones religiosas minoritarias debe el Estado asumir compromisos sobre una base contractual, y que tal norma, mantenida en la inoperancia durante cerca de cuarenta años<sup>13</sup>, se puso en práctica cuando se estipuló en 1984 el nuevo Concordato con la Santa Sede que sustituía al de 1939; en tal momento resultó políticamente oportuno abrir cauce al sistema de las «intese», que se celebraron con determinados grupos confesionales y no con otros porque, siempre según Vitale, se trataba de aquellos que no creaban problemas en relación con los valores generalmente aceptados en este terreno<sup>14</sup>.

No deja de tener interés y significado, por otro lado, que el propio Prodi, como hemos dejado señalado, aluda al artículo 20 de la Constitución en el momento de presentar el Proyecto de Ley. Podría ocultársenos la importancia que reviste la revisión legislativa –a partir de la norma constitucional– del problema de la presencia en Italia de las confesiones no católicas, si no prestásemos una especial atención a esta llamada en causa, por parte del presidente del Gobierno, del artículo 20 constitucional, en el que cabía inicialmente no parar la atención.

El artículo 8.º, en efecto, en su tercer párrafo, establece –en relación con las confesiones no católicas– que «i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze». La puesta en práctica de esta posibilidad, si bien tardía, al menos ha abierto un cauce para

---

<sup>13</sup> A ello hace referencia F. FINOCCHIARO, quien en 1978 entendía que resultaba difícil para el jurista comprender las razones por las que seguía sin ponerse en práctica el artículo 8, tercer párrafo, de la Constitución («Le intese nel pensiero dei giuristi italiani», en *Le intese tra Stato e Confessioni religiose. Problemi e Prospettive*, a cura di C. MIRABELLI, cit., pp. 15 ss.).

<sup>14</sup> A. VITALE, *Corso di Diritto Ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, settima edizione, Milano, 1993, p. 112. Las confesiones a que Vitale hace referencia son la «Tavola Valdese», las Asambleas de Dios en Italia, los Adventistas del Séptimo Día, la Unión de las Comunidades Israelitas, la Iglesia Luterana y la Iglesia Baptista.

la normalización de la situación en que aquellas confesiones se encontraban; y aunque no deja de estar lleno de interrogantes y problemas –la norma es, según Vitale, «volutamente ambigua ed oscura»<sup>15</sup>, cuando menos el camino se está ya recorriendo y, según afirma Prodi en su discurso al que nos venimos refiriendo, existe voluntad de continuarlo en el futuro. Pero esta vía abierta en el artículo 8.º, aparte de su propia imperfección<sup>16</sup>, no agota la problemática en cuestión. Sólo haciendo recurso al artículo 20 constitucional cabe, en cambio, –y de ahí el acierto de Prodi al recordarlo– intentar cubrir todo el campo de una nueva solución normativa para el tratamiento estatal de los que la norma a abrogar denominaba, en plena conformidad con el Concordato de 1929 pero en abierto contraste con el de 1984 y con la Constitución misma, «culti ammessi».

La doctrina se ha referido al citado artículo 20 definiéndolo como «una norma priva di fascino»<sup>17</sup>; su falta de atractivo se debería a que en su día no provocó ningún debate en la Asamblea constituyente y tampoco ha interesado demasiado a la doctrina, que le ha dedicado una atención más bien escasa<sup>18</sup>. Y, sin embargo, hoy se piensa que «dovrebbe essere considerata il *paradigma* della politica ecclesiastica dell'Italia repubblicana»<sup>19</sup>.

El lugar de esta norma en el conjunto de la normativa constitucional lo explica con precisión Lariccia, al ocuparse simultáneamente de los artículos 19 y 20 de la Ley suprema. El artículo 19, indica, garantiza la libertad religiosa tanto bajo el punto de vista individual como colectivo, y reconoce a todos los residentes en Italia (y no solamente a los ciudadanos italianos) tres derechos muy precisos: el de manifestar la propia fe, el de hacer propaganda de la misma y el de practicar el culto en privado y en público<sup>20</sup>. Según el mismo autor, el principio así enunciado en el artículo 19, que debe considerarse «la norma fondamentale in materia di libertà di religione nell'ordinamento italiano»<sup>21</sup>, está ligado a la disposición del artículo 20, que contempla una ulterior garantía de libertad en relación con los grupos religiosos, al establecer que «il carattere e il fine di religione e di culto di una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami

<sup>15</sup> A. VITALE, ob. cit., p. 112.

<sup>16</sup> A. VITALE, ob. cit., pp. 113 ss., señala los principales interrogantes que el artículo 8.º deja en pie acerca de las «intese», y que se refieren en especial a la «natura giuridica dell'interesse riconosciuto dalla norma», a la «identificazione del soggetto confessionale e rischi di discriminazione», a la «identificazione del soggetto statale», al «valore delle norme da emanare sulla base della contrattazione», y al «livello di rilevanza delle norme statutarie delle confessioni».

<sup>17</sup> R. BOTTA, *Manuale di Diritto Ecclesiastico. Valori religiosi e società civile*, Torino 1994, p. 308.

<sup>18</sup> R. BOTTA, ob. cit., pp. 308-309.

<sup>19</sup> R. BOTTA, ob. cit., p. 309.

<sup>20</sup> S. LARICCIA, ob. cit., p. 108.

<sup>21</sup> S. LARICCIA, ob. cit., p. 109.

fiscali per la loro costituzione, capacità giuridica ed ogni forma di attività». En todo caso, para situar el tema en sus justos términos, no debemos de prescindir de una consideración sobre la importancia relativa que acabamos de ver que Botta y Lariccia dan respectivamente a los artículos 20 y 19 de la Constitución. Por su parte, otro maestro del eclesiasticismo, Margiotta Broglio, había precedentemente considerado al artículo 8.º como la regla fundamental del Derecho eclesiástico italiano en cuanto norma base de toda la legislación constitucional y ordinaria en materia de confesiones religiosas y tutela del sentimiento religioso, amén de como precepto clave que preside la garantía constitucional del hecho asociativo religioso<sup>22</sup>. No tomaremos estas aparentes disparidades como motivo de discusión, sino, en su aspecto positivo, como pruebas de un empeño por mostrar el valor del conjunto de la normativa constitucional en orden a regular progresivamente el fenómeno religioso según las posibilidades políticas y las exigencias sociales.

En todo caso, tanto Lariccia como Botta se muestran conformes en considerar que la norma del artículo 20 contiene «una protesta contro ciò che avvenne nel periodo precedente»<sup>23</sup>, «una ferma protesta nei confronti di vicende storiche, di cui si ritiene ineludibile evitare il ripetersi»<sup>24</sup>.

El artículo 20, como ya quedó indicado, no suscitó en su día una especial atención entre los constituyentes italianos. Fue, en efecto, aprobado, sin discusión y sin enmiendas, sobre la base de un texto que había sido propuesto por Dossetti<sup>25</sup>. La calidad mítica de este nombre en la historia de la canonística y la política italiana de la postguerra debe ponernos sobre aviso, sin embargo, de aquello que la Asamblea Constituyente tal vez no comprendió en toda su importancia.

Dossetti dejó claro, y así se aceptó, que la norma contiene un concepto negativo, a saber, que el carácter eclesiástico y el fin cultural no pueden ser causa de un tratamiento odioso con daño para los mismos entes, lo cual constituía una exigencia tanto de la Iglesia católica como de los restantes entes religiosos no pertenecientes a la misma<sup>26</sup>. En fin de cuentas, se trataba de llegar «ad una norma comune per tutte quante le associazioni dei diversi culti»<sup>27</sup>.

He aquí el verdadero punto de interés de la norma. El ordenamiento italiano se abría a través de ella a todos los cultos diversos del católico, e incluso

---

<sup>22</sup> F. MARGIOTTA BROGLIO, «Sistema di intese e rapporti con la Chiesa Cattolica», en *Le intese tra Stato e confessioni religiose. Problemi e prospettive*, a cura di C. MIRABELLI, cit., p. 135.

<sup>23</sup> S. LARICCIA, ob. cit., p. 109.

<sup>24</sup> R. BOTTA, ob. cit., p. 309.

<sup>25</sup> R. BOTTA, ob. cit., p. 307.

<sup>26</sup> R. BOTTA, ob. cit., p. 307.

<sup>27</sup> R. BOTTA, p. 308.

creaba una norma de derecho común para los mismos, que potencialmente habría de evitar un tratamiento sectorial privilegiado para algunos de ellos. En esta línea, la doctrina ha sostenido que el artículo 20 viene a evitar que se repitan en el futuro situaciones del pasado, no sólo en el sentido de la existencia de un culto o cultos favorecidos con desconocimiento o minusvaloración de los demás, sino también evitándose cualquier rebrote del jurisdiccionalismo o regalismo, que siempre ha ido históricamente acompañado de dos elementos concurrentes: una religión de Estado y un Estado limitador de la libertad de esa misma Iglesia<sup>28</sup>. La relación de autores que Botta cita, en la nota que acabamos de recoger, en favor de su tesis, y la variedad ideológica de los mismos, nos dispensa de analizar un dato que tantas conformidades concita<sup>29</sup>.

Por esto mismo, puede también compartirse la afirmación del mismo autor según la cual el mencionado artículo 20 representa tanto un punto de llegada que concluye una larga experiencia histórica, como un punto de partida hacia una nueva experiencia política, precisamente aquella a que hacía referencia el presidente Prodi en sus palabras de presentación del Proyecto de Ley. Frente a quienes opinaron que en esta norma no se contiene sino una confirmación de los principios del Concordato lateranense en materia de entes eclesiásticos, complementando y reforzando los artículos 3.º, 7.º y 8.º de la Constitución, prevalece hoy la tesis según la cual el artículo 20 constituye precisamente la tutela de aquellos nuevos grupos, movimientos, cultos y asociaciones con fines religiosos, que no entran en el ámbito de aplicación de los artículos 7.º y 8.º<sup>30</sup>.

Con lo cual se amplía potencialmente el panorama de la libertad religiosa en Italia, que si fue, a partir de 1929, un campo de tutela por parte del Estado de derechos confesionales que cubría a una única confesión, alcanzó a partir de 1984 a otras confesiones por la vía de las «intese», quedando aún por extenderse a muchos otros posibles grupos religiosos que no tendrán posible-mente nunca un acuerdo con el Estado, pero que no por ello tienen menor derecho a la libertad. Precisamente la pervivencia en Italia de esa reliquia de un pasado hoy inaceptable, como son las normas sobre «culti ammessi»

<sup>28</sup> Mediante el artículo 20, «il costituente ha inteso evitare che, dopo l'entrata in vigore della costituzione, si potesse ancora adottare in Italia, come era già avvenuto in passato, la formula organizzatoria del "giurisdizionalismo"» (S. LARICCIA, ob. cit., p. 109); «la norma vorrebbe essere insuperabile ostacolo a che in Italia sia nuovamente adottata la formula organizzatoria del giurisdizionalismo (Lariccia) e soprattutto la politica eversiva dell'asse ecclesiastico perseguita negli anni sessanta del secolo scorso (Amorth, Catalano, D'Avack, Del Giudice, Finocchiaro, Giacchi, Pergolesi, Petroncelli, Ravà A., Virga)» (R. BOTTA, ob. cit., p. 309).

<sup>29</sup> En un sentido semejante, y también con importantes referencias a una doctrina muy varia y del más alto relieve en la eclesiasticística italiana, señala F. FINOCCHIARO que el artículo 20 de la Constitución «testimonia uno degli aspetti più moderni e originali dell'attuale assetto costituzionale» (*Diritto Ecclesiastico*, 6 ristampa, Bologna 1991, p. 163-164).

<sup>30</sup> R. BOTTA, p. 309.

de 1929 y 1930, hace necesario actuar el artículo 20 de la Constitución para sustituir tal concepto restrictivo por el de una plena libertad.

A tal efecto, señala Prodi el sentido que debe darse a la abrogación de las normas sobre «culti ammessi» de 1929 y 1930, que se establece en el artículo 40 del nuevo Proyecto de Ley. Una doble razón justifica y pide tal abrogación: las exigencias que para un Estado democrático se derivan del reconocimiento del derecho de la libertad religiosa, y la necesidad de explicitar, en términos propios del ordenamiento jurídico italiano, los principios que se contienen en las convenciones internacionales sobre los derechos del hombre. En consecuencia, el legislador deberá abrir –y a ello tiende la Ley que se proyecta– una doble vía para la operatividad de tales principios: la tutela constitucional de los intereses religiosos colectivos, con referencia a la autonomía de los mismos en orden a su propia organización –artículo 8.º, segundo párrafo, y artículo 20 de la Constitución–, sin por ello modificar el sistema de regulación bilateral de las relaciones entre el Estado y las confesiones (art. 8.º, tercer párrafo).

Para la doctrina, se logra así, a través precisamente del artículo 20 de la Constitución, dar vida a una igualdad formal –y no solamente a una igual libertad– de todos los entes religiosos; al mismo tiempo, se consigue hacer posible una tutela preferencial de los intereses religiosos y de culto, en el marco de la relación que los mismos guardan con la promoción del pleno desarrollo de la persona <sup>31</sup>.

No se nos puede, por otro lado, ocultar un segundo aspecto de las aspiraciones de un sector de la doctrina a este respecto. La aspiración a que todo el fenómeno religioso se regule por la ley común, que late en el pensamiento por ejemplo de Piero Bellini cuando defiende «una legge comune sul fatto religioso» <sup>32</sup>, es común al superviviente liberalismo, así como a una fuerte corriente doctrinal partidaria del laicismo del Estado. Debe al respecto señalarse el contraste que inevitablemente surge entre tales postulados y la consideración de que el sentimiento religioso resulta ser una realidad con derecho a una particular protección legal o a una particular toma en consideración como un bien público; línea ésta que se contiene expresamente recogida en el artículo 16, número 3, de la vigente Constitución española, y que no es del todo ajena a la Corte Constitucional de Italia <sup>33</sup>. En el pensamiento del actual eclesiasticismo italiano encontraríamos no pocos ejemplos que no es preciso ahora traer a colación. Pero, en todo caso, con el nuevo Proyecto de Ley sí que se actúa

<sup>31</sup> R. BOTTA, ob. cit., p. 310.

<sup>32</sup> P. BELLINI, ob. cit., pp. 167 ss.; *vid.*, del mismo autor, «Realtà sociale religiosa e ordine proprio dello Stato», en *Normativa ed organizzazione delle minoranze confessionali in Italia*, a cura di V. PARLATO e G. B. VARNIER, cit., p. 290-310.

<sup>33</sup> *Vid.* A. G. CHIZZONITI, «Pluralismo confessionale e lotta all'intolleranza religiosa», en *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 1997/2, p. 332.

una línea de pensamiento que, cuando menos, trata de borrar la vieja estela de la sobreviviente legislación del fascismo. La doctrina a que nos referimos aspiraría a más, y no es el momento de entrar en los más modernos análisis del propio texto constitucional a los efectos de reinterpretar en clave de una nueva lectura sus artículos 7.º y 8.º Pero, por el momento, bastará decir que es difícil predecir la suerte que, en definitiva, haya de correr el Proyecto de Ley que, a un año de su presentación parlamentaria, aún no ha sido objeto de discusión en la Cámara y mucho menos de promulgación.

Italia, que fue como es notorio pionera en el desarrollo de los acuerdos con las confesiones, está retrasando mucho tanto la elaboración de una Ley de Libertad Religiosa como la supresión de la vieja normativa sobre los «culti ammessi». La experiencia española podría ser útil en este sentido como término de comparación, toda vez que nuestro proceso comenzó por una normativa constitucional de amplio espectro; continuó por una Ley de Libertad Religiosa; y dio paso a unos Acuerdos con tres Federaciones –Evangélica, Israelita e Islámica– que abarcan un amplísimo tanto por ciento del total de grupos religiosos minoritarios con presencia social y jurídica en España, sin que los restantes vean minorada su libertad religiosa, que para todos garantiza suficientemente la correspondiente Ley antes citada. Es una forma distinta de la italiana; tampoco la inversa. Procede de una historia concordataria y constitucional diferente, pero no deja de aportar elementos de análisis que el legislador italiano podría provechosamente conocer, tal y como nuestros poderes públicos tomaron en consideración el modelo de Italia en aquellos extremos en que pudo servir de orientación para recuperar por vía constitucional los derechos de libertad e igualdad de todos los ciudadanos.

## APÉNDICE

### CAMERA DEI DEPUTATI

#### DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
(PRODI)

Di concerto con il Ministro dell'Interno  
(NAPOLITANO)

Con il Ministro della Pubblica Istruzione e dell'Università e della Ricerca  
Scientifica e Tecnologica  
(BERLINGUER)

Con il Ministro delle Finanze  
(VISCO)

Con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale  
(TREU)

E con il Ministro del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione  
Economica  
(CIAMPI)

*Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi*

Presentato il 3 luglio 1997

Onorevoli deputati:

La riforma della legislazione ecclesiastica articolatasi tra il 1984 e il 1989 nella revisione concordataria, nell'approvazione delle norme sugli enti cattolici e il sostentamento del clero, nonché nella applicazione del procedimento di cui al terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione per la regolamentazione, sulla base di «intese», dei rapporti tra lo Stato ed alcune confessioni religiose –che hanno segnato la prima, significativa fase di un vasto processo di rinnovamento tutt'oggi in corso– si integra con il presente disegno di legge che intende compiutamente attuare i principi costituzionali in materia di libertà di coscienza, di religione o credenza e, parallelamente, abrogare la normativa degli anni 1929-1930 sull'esercizio di quei culti diversi dal cattolico che, con riferimento al concetto di religione dello Stato, venivano allora definiti «ammessi».

La normativa del 1929-1930 si fonda non solo su principi diversi da quelli della Costituzione democratica, ma si palesa, in molte disposizioni, in netto contrasto con il sistema della medesima. D'altra parte, la regola della bilateralità sancita dagli articoli 7, secondo comma, e 8, terzo comma, della Costituzione, non esaurisce il sistema di pluralismo confessionale disegnato dal costituente, sia con riferimento alla tutela dei diritti inviolabili anche all'interno delle formazioni sociali «confessionali», sia in relazione ai diritti previsti dagli articoli 17, 18 e 19 della Costituzione ed alla libertà delle associazioni e istituzioni con finalità di religione o di culto, di cui all'articolo 20 della Costituzione, anche operanti, per loro natura o volontà, nel quadro del diritto comune. Non sarebbe possibile, inoltre, riservare alla negoziazione legislativa con le confessioni religiose –di per sé necessariamente settoriali– la regolamentazione di interessi riguardanti la generalità dei cittadini e di materie che non toccano o non si esauriscono nel rapporto Stato-confessioni, e tanto meno l'abrogazione di leggi, come quelle del 1929-1930, valide per tutti i culti liberamente esercitati nello Stato e diversi dal cattolico.

Il presente disegno di legge propone pertanto la abrogazione integrale della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, tenendo conto di esigenze che concernono direttamente profili soggettivi della libertà religiosa, ma anche esplicitando in termini propri dell'ordinamento giuridico italiano principi contenuti nelle numerose convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo ratificate, rafforzandone, in tal modo, l'operatività. Si propone, altresì, di contribuire all'attuazione della tutela costituzionale degli interessi religiosi collettivi, con riferimento all'autonoma organizzazione dei medesimi –su base statutaria e associativa (articolo 8, secondo comma, e articolo 20 della Costituzione)–, senza ovviamente modificare o pregiudicare, in alcun modo, il sistema di regolazione bilaterale dei rapporti Stato-confessioni religiose (articolo 8, terzo comma, della costituzione), ma agevolando la vita di istituzioni, associazioni e organizzazioni con finalità di religione o di culto nella loro libera e peculiare espressione.

Si propone, poi, di dare formale attuazione all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione tenendo conto della recente legge sulla Presidenza del Consiglio dei ministri ed anche delle linee già sperimentate per alcune confessioni religiose negli anni 1984-1987, definendo e regolando le procedure per la stipulazione di intese tra Governo e rappresentanze delle confessioni religiose interessate.

Il capo I del disegno di legge (articoli 1-12) intende concretare, per una compiuta attuazione, le garanzie costituzionali dei diritti individuali e collettivi di libertà religiosa, raccordando, altresì, tali garanzie con le disposizioni in materia contenute nelle convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo (Con-

venzione europea del 1950, Patti internazionali del 1966, Convenzione sulla discriminazione razziale del 1966, eccetera) firmate e ratificate dal nostro Paese, ma spesso non tenute nel dovuto conto nella concretezza dell'esperienza giuridica.

Pertanto, l'articolo 1 del disegno di legge è volto a rendere operativo tale raccordo in conformità all'articolo 10 della Costituzione, lasciando ovviamente «aperto» il riferimento ad eventuali future convenzioni ed anche, più in generale, alle norme del diritto internazionale «generalmente riconosciute».

L'articolo 2, che richiama alle prescrizioni contenute nelle ricordate convenzioni internazionali, anche alla luce di atti come la Dichiarazione dell'ONU sulla libertà religiosa del 1981 e l'Atto finale della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Helsinki, 1975), intende specificare, in coerenza con tali prescrizioni —ma non esaustivamente—, i contenuti della libertà di religione e di coscienza, chiarendo che, proprio in conformità al diritto internazionale, le «credenze non religiose» o atee vanno ricondotte, sul piano della loro libera professione e del loro esercizio, alla libertà di coscienza che il disegno di legge si propone di garantire concretamente. È noto, infatti, che nelle ricordate convenzioni internazionali il termine «credenza» (negli originali in lingua francese «conviction» e in lingua inglese «belief») si riferisce alle convinzioni non religiose o atee che vengono espressamente ricondotte alle fattispecie garantite dalle disposizioni in materia di libertà fondamentali. Viene, inoltre, specificato che tale libertà include il diritto di mutare credenza religiosa, mentre vengono opportunamente richiamati i limiti all'esercizio dei diritti in questione previsti dalla Costituzione (articoli 18 e 19).

L'articolo 3, che si rifà al principio costituzionale di uguaglianza, garantisce da qualsiasi obbligo di dichiarazioni riguardanti specificamente l'appartenenza confessionale, non vietando, ovviamente, la possibilità di rispondere liberamente e volontariamente a richieste dirette a fini statistici o di ricerca scientifica.

L'articolo 4, che si rifà invece alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articolo 25), a quella sui diritti del fanciullo (1959), alla Dichiarazione dell'ONU del 1981 (articolo 5) ed al Protocollo addizionale alla Convenzione europea del 1950 (articolo 2), reso esecutivo ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel garantire il diritto dei genitori, precisa che l'istruzione e l'educazione della prole in conformità alle proprie credenze, religiose o non religiose, devono essere impartite nel rispetto della personalità e senza pregiudicare la salute dei figli. Stabilisce, inoltre, risolvendo un problema che ha trovato soluzioni disparate sul piano normativo e giurisprudenziale, al quattordicesimo anno di età la capacità dei minori di compiere scelte inerenti alla libertà di religione senza ovviamente interferire con l'esercizio della potestà dei genitori regolato dal codice civile.

L'articolo 5 è una utile specificazione della libertà di riunione e di associazione garantita dalla Costituzione e qui riferita ai fini di religione e di culto anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 1958.

Con l'articolo 6 si intende garantire la piena libertà di adesione e di recesso da qualsiasi organismo confessionale, unitamente al diritto di partecipare alla vita interna di esso, salvaguardando l'esercizio di tali libertà e diritti da ogni atto che possa discriminare, molestare o nuocere chi li eserciti e tutelando, quindi, anche persone particolarmente esposte, quali minori o incapaci.

La non ingerenza da parte dello Stato riguarda esclusivamente la partecipazione alla vita e all'organizzazione delle confessioni religiose, mentre rimangono integralmente applicabili le disposizioni che garantiscono i diritti inviolabili, la personalità e l'integrità psichica e fisica degli aderenti.

L'articolo 7 specifica alcune libertà indicate all'articolo 2, precisando che il diritto di agire secondo coscienza, in relazione alle proprie convinzioni religiose o non religiose, non può comportare la violazione di diritti e doveri costituzionali, e rinviando alle norme riguardanti specifiche materie nelle quali possa avere rilievo l'obiezione di coscienza per quanto riguarda la modalità relative al concreto esercizio di tale diritto.

L'articolo 8, invece, si limita a riprodurre negli stessi termini l'articolo 11, primo comma, del Concordato del 1984, ripreso anche dall'articolo 6, primo comma, dell'Intesa con le comunità ebraiche (leggi 25 marzo 1985, n. 121, e 8 marzo 1989, n. 101), riaffermando per tutti una garanzia di libertà che, se limitata ai soli aderenti ad alcune confessioni, sarebbe non adeguata al principio costituzionale di uguaglianza.

Trattasi comunque, come nel caso dell'articolo 7, di una norma di principio che esige ulteriore attuazione, per i differenti settori considerati, alla luce delle singole e particolari esigenze di ciascuno di essi.

L'articolo 9, che concreta, con riferimento ai «ministri di culto», il principio della libertà di organizzazione confessionale, stabilisce, diversamente dalla legge n. 1159 del 1929, che prevedeva l'approvazione governativa delle nomine (articolo 3), che solo quando compiano atti destinati ad avere rilevanza giuridica nello Stato, i ministri di culto debbano depositare certificazione attestante la qualifica rivestita all'ufficio competente. Tale ufficio dovrà essere individuato in relazione all'atto da compiere e all'autorità competente nella specifica materia.

All'articolo 10 si disciplina l'importante argomento del matrimonio. La normativa, che si ricollega alla precedente legislazione, si ispira ai principi di libertà e di volontarietà della nuova legislazione ecclesiastica, e si basa su due presupposti: che sia il cittadino a voler celebrare il matrimonio con effetti civili in forma religiosa; che il ministro di culto presso cui si celebra il matrimonio

appartenga ad una confessione avente personalità giuridica ai sensi della nuova legge.

La ragione di questo secondo presupposto è semplice: trattandosi di questione che attiene allo stato delle persone, è necessario che il ministro del culto –cui sono demandate importanti funzioni, anche di rilevanza pubblicistica– appartenga ad una organizzazione fornita di requisiti minimi di stabilità e di certezza, propri, appunto, delle persone giuridiche.

L'articolo 10 delinea gli adempimenti di cui devono farsi carico i cittadini interessati, il ministro del culto e l'ufficiale di stato civile. In particolare, è previsto che, dopo la richiesta delle pubblicazioni da parte dei nubendi, l'ufficiale di stato civile rilasci loro un nulla osta in duplice originale dal quale risulti che non esistono impedimenti al matrimonio e che agli stessi nubendi sono stati spiegati i diritti e i doveri di coniugi attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.

Il ministro del culto, dopo avere celebrato il matrimonio, compila l'atto certificativo in duplice originale e ne trasmette uno, con allegato il nulla osta di cui in precedenza, all'ufficiale di stato civile entro e non oltre cinque giorni dalla celebrazione. Entro ventiquattro ore dal ricevimento della documentazione, deve farsi luogo alla trascrizione del matrimonio.

L'articolo 11 si ricorda, rinviano ad essa, alla normativa in vigore in materia di attribuzioni degli organi collegiali della scuola (decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, articolo 12), in relazione all'utilizzo di edifici ed attrezzature scolastiche per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale e sociale sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dall'ordinamento scolastico.

Con l'articolo 12, infine, si è estesa, in conformità ai principi costituzionali (articolo 3 e 20), una disposizione –limitata alle affissioni e distribuzioni di stampati che avvengano all'interno o all'ingresso di luoghi o edifici di culto– già vigente per quanto riguarda i fedeli cattolici e gli appartenenti alle confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

È utile chiarire, all'inizio del capo II del presente disegno di legge, il rapporto tra l'articolo 13 e l'articolo 14, ovvero tra la libertà e i diritti che competono a qualsiasi confessione religiosa e la condizione giuridica delle confessioni che chiedono e ottengano la personalità giuridica agli effetti civili.

Con l'articolo 13 si enuncia in modo espresso e dettagliato quanto già previsto riassuntivamente dall'articolo 8, primo comma, della Costituzione, laddove si afferma che «tute le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge». La garanzia della eguale libertà è riconosciuta dalla Costituzione a tutte le confessioni senza richiedere per ciascuna di esse alcun

requisito, né formale né sostanziale; quindi, però il solo fatto di esistere nell'*habitat* sociale, ogni confessione religiosa fruisce di un eguale patrimonio di libertà che non può essere limitato, o messo in discussione, dal legislatore ordinario o dai poteri pubblici. Quindi, per rendere più esplicito il contenuto della citata disposizione costituzionale, l'articolo 13 prevede che tra i diritti che competono a tutte le confessioni religiose siano da ricomprendersi i diritti di celebrare i propri riti, aprire edifici di culto, diffondere la propria fede, formare e nominare liberamente i ministri di culto, emanare liberamente atti in materia spirituale, assistere spiritualmente i propri appartenenti, comunicare e corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni o con altre confessioni, e promuovere la valorizzazione delle proprie esperienze culturali.

Diverso è il valore degli articoli 14 e seguenti, che si sono fatti carico di un problema sempre più sentito negli ordinamenti contemporanei: quello di fornire alle confessioni religiose che lo desiderano gli strumenti giuridici necessari, a cominciare dalla personalità giuridica, per potere agire nei diversi settori della vita associativa e dei rapporti patrimoniali.

La legge prevede, quindi, l'*iter* procedurale per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, si attiene ad un criterio di snellezza che mantenga gli accertamenti e le verifiche negli stretti ambiti costituzionali.

In base all'articolo 14, il riconoscimento della personalità giuridica della confessione o dell'ente esponenziale di essa ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.

Alla domanda di riconoscimento deve essere allegato lo statuto della confessione di cui è fatta menzione nell'articolo 8, secondo comma, della Costituzione; può inoltre allegarsi ogni altra documentazione che si riterrà utile ai fini del riconoscimento stesso (articolo 15, comma 1).

È stato, in ogni caso, chiarito che l'attribuzione della personalità giuridica è possibile solo per quelle confessioni che hanno sede in Italia e che sono rappresentate, giuridicamente e di fatto, da un cittadino italiano avente domicilio in Italia (articolo 15, comma 2); infatti, l'articolo 38 prevede che le confessioni religiose che siano persone giuridiche straniere restano regolate dall'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale; ove, però, abbiano una presenza sociale organizzata in Italia e intendano essere riconosciute nell'ordinamento italiano potranno seguire l'*iter* previsto dalla norme del presente disegno di legge.

Come si è accennato, le confessioni religiose che intendono ottenere la personalità giuridica devono presentare lo statuto e quelle indicazioni necessarie alla propria identificazione normativa e strutturale, ma il parere del Consiglio di Stato verte essenzialmente sul carattere confessionale dell'orga-

nizzazione richiedente e implica l'accertamento che lo statuto non contrasta con l'ordinamento giuridico italiano e non contega disposizioni contrarie ai diritti inviolabili dell'uomo (articolo 16). A tali parametri è dunque ancorata la valutazione ai fini del riconoscimento, così superandosi quell'ampia discrezionalità della pubblica amministrazione, tipica della precedente legislazione sui «culti ammessi».

Gli articoli 17, 18 e 19 prevedono adempimenti successivi al riconoscimento della personalità giuridica.

L'articolo 17 prescrive che la confessione riconosciuta si iscriva nel registro delle persona giuridiche; l'articolo 18 prevede la comunicazione al Ministero dell'interno delle eventuali modificazioni dello statuto e dell'organizzazione e insieme la revoca del riconoscimento qualora venga meno uno dei requisiti in base a i quali il riconoscimento stesso è stato concesso.

Infine, l'articolo 19 richiama, per gli acquisti, le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti delle persona giuridiche. Si tratta di disposizioni che rispondono a principi generali e che già esistono per tutte le confessioni che abbiano già stipulato accordi o intese con lo Stato.

In relazione agli articoli citati (13-19) è necessaria una precisazione.

Come si è accennato, il riconoscimento della personalità giuridica è previsto per la confessione religiosa o per l'ente esponenziale che la rappresenta. Ciò è dovuto al fatto che alcune confessioni religiose non intendono –per motivi teologici, dottrinali, o di altra natura– chiedere il riconoscimento in quanto tali, mentre preferiscono che acquisti la personalità giuridica un proprio ente esponenziale che ne assume la rappresentanza in ambito civile.

L'ordinamento giuridico, di conseguenza, recepisce un'esigenza confessionale e prevede che sia la confessione stessa a scegliere se chiedere direttamente il riconoscimento della personalità giuridica o se farlo richiedere al proprio ente esponenziale. È evidente che qualunque sia la scelta, le conseguenze sono le stesse: è sempre la confessione religiosa che o direttamente o per il tramite del proprio ente esponenziale, può agire nell'ordinamento civile fruendo della condizione giuridica prefigurata dalla legge.

Di tali norme, infatti, non possono usufruire, secondo le disposizioni vigenti, se non le confessioni che regolino bilateralmente i rapporti con lo Stato, con conseguente limitazione del principio dell'uguale libertà delle confessioni (articolo 8 della Costituzione).

L'articolo 20 stabilisce l'applicabilità a tutte le confessioni religiose aventi personalità giuridica delle norme statali vigenti in tema di concessioni e locazioni di beni dello Stato ad enti ecclesiastici e per la disciplina urbanistica dei servizi religiosi.

Si garantisce inoltre sotto questo profilo la libertà religiosa ed il diritto di

tutti i cittadini a servizi religiosi in conformità alla loro credenza ed appartenenza, commisurando interventi e servizi alle situazioni che rendono necessario l'intervento sulla base di esigenze oggettive, vale a dire in funzione di una presenza organizzata nel territorio, tenendo, quindi, conto delle esigenze religiose della popolazione.

Anche nella applicazione di queste norme statali viene ad estendersi il riferimento al principio di bilateralità, prefigurando intese tra le confessioni interessate e le autorità competenti. Si stabilisce comunque una salvaguardia, riferita alla destinazione del bene, per gli edifici di culto costruiti con contributi regionali e comunali.

L'articolo 21, stabilendo che associazioni e fondazioni con finalità di religione o di culto possano ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con le modalità e i requisiti previsti dal codice civile, costituisce una specifica applicazione dell'articolo 20 della Costituzione ed attribuisce concretezza, anche ai fini del riconoscimento della personalità giuridica e della capacità, al divieto di trattamenti discriminatori (rispetto ad ogni altra) per le associazioni ed istituzioni di carattere ecclesiastico o con finalità di religione o di culto. La stessa norma, inoltre, affianca al rinvio al diritto comune la garanzia della loro specificità per quanto attiene alle attività di religione o di culto.

L'articolo 22 estende alle confessioni religiose con personalità giuridica o al loro ente esponenziale che persegue finalità di religione, credenza o culto senza alcun fine di lucro, principi non estranei alla logica del vigente sistema fiscale, in sintonia con orientamenti emersi in sede parlamentare relativi al trattamento fiscale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), del contribuente che liberamente intenda concorrere a sostenere finanziariamente attività di rilevante valore culturale o sociale svolte senza fine di lucro.

Del resto tra gli oneri deducibili dal reddito della persona fisica già oggi sono comprese le erogazioni liberali in danaro a favore di enti, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di rilevante valore culturale ed artistico, con modalità prefissate e controlli sull'impiego delle erogazioni stesse [articolo 10, lettera p) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917]. Anche quello della deducibilità degli «oneri di utilità sociale» è principio già noto al sistema fiscale (cfr. articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi).

Agli stessi criteri oggettivi si ispira la norma proposta, che fissa in lire 2 milioni il limite di deducibilità, prevede la iscrizione in apposito elenco, evidentemente a richiesta della confessione o dell'ente interessato, come condizione per essere destinatario delle erogazioni; stabilisce inoltre principi appli-

cativi che rendono rilevanti i profili oggettivi delle modalità della deduzione delle erogazioni e dei relativi controlli rimessi poi ad apposita regolamentazione da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze.

I profili fiscali sono completati dagli articoli 23 e 24 che, distinguendo la attività di religione, credenza o culto dalle altre attività e specificando quali si considerano comunque appartenenti all'una o all'altra categoria, ribadiscono principi che hanno già trovato incontrovertibile espressione nella legislazione ecclesiastica.

L'articolo 25 salvaguarda, in conformità ad indirizzi legislativi vigenti e consolidati, la possibilità e le modalità di iscrizione dei ministri di culto all'apposito fondo previdenziale.

Il capo III del disegno di legge definisce il procedimento per la stipulazione delle intese tra Stato e confessioni diverse dalla cattolica, previste dall'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Un procedimento che, nella prima fase di attuazione di tale norma e prima dell'emanazione della legge che disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (legge 23 agosto 1988, n. 400), era stato avviato in via sperimentale onde verificare nella pratica i modi idonei a realizzare, dopo un lungo periodo di stasi, la previsione della Costituzione.

Grazie all'esperienza delle prime intese ed alla luce della citata legge n. 400 del 1988 si è, pertanto, definito, nelle sue diverse fasi, il sistema di predisposizione delle intese stesse, riservando, ai sensi degli articoli 2, comma 3 lettera *i*), e 5, comma 2 lettera *b*) della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei ministri la rappresentanza del Governo e la stipulazione, e delegando al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, segretario del Consiglio dei Ministri, la conduzione delle trattative con il rappresentante della confessione religiosa interessata onde garantire la bilateralità della negoziazione.

Per assicurare, inoltre, il necessario supporto tecnico a tale negoziazione, è prevista l'istituzione, per ogni singola intesa, di una commissione di studio costituita pariteticamente da dirigenti generali delle amministrazioni statali interessate o equiparati in relazione ai temi da trattare e da altrettanti esperti designati dalla confessione religiosa. Il presidente di tale commissione verrà scelto tra le categorie indicate dalla citata legge n. 400 del 1988 (articoli 29 e 30).

Il disegno di legge prevede che l'istanza diretta alla stipulazione di un'intesa possa essere presentata sia da confessioni che abbiano già ottenuto la personalità giuridica, sia da confessioni che non l'abbiano acquisita. In tal caso il Ministero dell'interno, acquisendo il relativo parere del Consiglio di Stato, ve-

rificherà che lo statuto della confessione non contrasta con l'ordinamento giuridico, come previsto dall'articolo 8, secondo comma, della Costituzione (articoli 26 e 27), restando al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di avviare, alla luce delle valutazioni acquisite, le procedure negoziali, invitando la confessione a designare il proprio rappresentante (articolo 28).

Gli articoli 31 e 32 regolano le fasi successive alla conclusione della trattativa di cui all'articolo 29: deliberazione del Consiglio dei ministri e informazione preventiva al Parlamento, ancor prima che inizi il procedimento legislativo di approvazione.

Anche a tal fine si prevede (articolo 32) che in caso di osservazioni, rilievi e indirizzi che emergano in sede di Consiglio dei ministri o nella fase di informazione al Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri rimetta il testo al Sottosegretario perchè riprenda la trattativa con la confessione interessata onde apportare le eventuali opportune modifiche al testo.

Gli articoli 33 e 34 dispongono in ordine alla firma dell'intesa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e del rappresentante della confessione e alla presentazione al Parlamento della legge che, sulla base dell'intesa, regolerà i rapporti della confessione stessa con lo Stato.

L'articolo 35, infine, rifacendosi alle esperienze normative affermatesi in materia di assicurazione contro le malattie e di previdenza del clero cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose [leggi 28 luglio 1967, n. 669; 22 dicembre 1973, n. 903 (articolo 5); legge 6 dicembre 1971, n. 1055; decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160], prevede che leggi relative a specifiche materie che coinvolgano rapporti tra Stato e confessioni religiose aventi personalità giuridica possano contemplare la possibilità di applicazione di disposizioni in esse contenute con decreti del Presidente della Repubblica, sulla base di previa concertazione (intesa) con la confessione religiosa interessata che lo richieda. Un procedimento, giova sottolinearlo, già contemplato dalla legge istitutiva del Fondo di previdenza per i ministri di culto.

Le disposizioni finali e transitorie (articoli 36-40) sono dirette, da un lato, a non privare della personalità giuridica le confessioni e gli istituti riconosciuti in base alle disposizioni del 1929-1930 sull'esercizio dei «culti ammessi nello Stato», salvaguardando altresì il regime giuridico e previdenziale riservato ai ministri di culto che hanno ottenuto la prevista «approvazione governativa»; dall'altro a specificare che le confessioni religiose che siano persone giuridiche straniere continuano ad essere regolate, come già ricordato, dall'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, pur potendo richiedere, ove abbiano in Italia una presenza sociale organizzata, di essere riconosciute alle condizioni indicate dal presente disegno di legge.

Gli articoli 39 e 40, infine, nel disporre l'abrogazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, delimitano l'applicazione della normativa contenuta nel disegno di legge, facendo in ogni caso integralmente salve le disposizioni di origine negoziale emanate in attuazione di accordi o intese stipulati ai sensi degli articoli 7, secondo comma, e 8, terzo comma, della Costituzione, nonché quelle di derivazione internazionale quale, ad esempio, la legge n. 654 del 1975, come modificata dal decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993.

Se la legislazione ecclesiastica degli anni 1985-1989 ha rappresentato una compiuta speranza, sul piano normativo, del principio costituzionale del pluralismo religioso, il presente disegno di legge intende contribuire, nella prospettiva della coerenza interna ed esterna relativamente all'insieme del dettato costituzionale e nel rispetto delle regole bilateralmente concordate con alcune confessioni, alla ricomposizione unitaria della disciplina degli interessi religiosi e di coscienza nei loro fondamentali profili individuale, associativo e istituzionale.

#### RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362)*

L'articolo 22 del presente disegno di legge, che prevede la possibilità per il contribuente di dedurre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali fino ad un massimo di lire 2 milioni in favore delle confessioni religiose aventi personalità giuridica o del loro ente esponenziale, comporta una diminuzione delle entrate per il bilancio dello Stato stimata in lire 3,4 miliardi su base annua, a decorrere dall'anno 2000. Per l'anno 1998 il maggiore onere viene valutato in lire 800 milioni, considerata la necessità dell'adeguamento degli acconti, mentre per l'anno 1999, per effetto della necessità di adeguare sia il saldo che gli acconti, la perdita di gettito risulta pari a lire 5,2 miliardi.

Risulta, infatti, dai dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 1993, che la deducibilità ai fini IRPEF delle erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose (Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno; Assemblee di Dio in Italia; Tavola Valdese; Unione cristiana evangelica battista d'Italia; Chiesa evangelica luterana in Italia e comunità collegate; Comunità ebraiche), prevista dalla normativa vigente, comporta un onere complessivo di circa 70 miliardi di lire in ragione d'anno. Dalle dispo-

sizioni agevolative in esame, che estendono a tutte le confessioni religiose con personalità giuridica la predetta deducibilità, potrebbe derivare un incremento di erogazioni liberali per un importo di circa lire 10 miliardi annui e, considerando un'aliquota del 34 per cento, la perdita di gettito in ragione d'anno sarebbe, appunto, di 3,4 miliardi di lire.

A copertura delle minori entrate sopra indicate viene utilizzato l'accantonamento di parte corrente della Presidenza del Consiglio dei ministri (voce riduzione canone RAI) per gli anni 1998 e 1999, relativamente agli importi di lire 800 milioni e di lire 5,2 miliardi.

L'articolo 23 prevede l'equiparazione delle confessioni religiose aventi personalità giuridica, o dei loro enti esponenziali aventi finalità di religione, credenza, o culto, agli enti aventi fini di beneficenza o istruzione. Tale equiparazione non comporta perdita di gettito in quanto trova conferma nella nuova formulazione dell'articolo 6, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dal comma 8 dell'articolo 66 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede la riduzione a metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), anche per gli enti del tipo considerato.

La norma assume, pertanto, sotto il profilo fiscale, valore meramente ricognitorio.

## DISEGNO DI LEGGE

### Capo I

#### *Libertà di coscienza e di religione*

*Articolo 1.* 1. La libertà di coscienza e di religione, quale diritto fondamentale della persona, è garantita a tutti in conformità alla Costituzione, alle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell'uomo ed ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti in materia.

*Articolo 2.* 1. La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o credenza, in qualsiasi forma individuale o associata, di diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico. Comprende inoltre il diritto di mutare religione o credenza. Non possono essere disposte limitazioni alla libertà di coscienza e di religione diverse da quelle previste dagli articoli 18 e 19 della Costituzione.

*Articolo 3.* 1. Nessuno può essere discriminato o soggetto a costrizioni in ragione della propria religione o credenza, né essere obbligato a dichiarazioni specificamente relative alla propria appartenenza confessionale.

*Articolo 4.* 1. I genitori hanno diritto di istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, in coerenza con la propria fede religiosa o credenza, nel rispetto della loro personalità e senza pregiudizio della salute dei medesimi.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 316 del codice civile, i minori, a partire dal quattordicesimo anno di età, possono compiere autonomamente le scelte pertinenti all'esercizio del diritto di libertà religiosa.

*Articolo 5.* 1. I diritti di riunione e di associazione previsti dagli articoli 17 e 18 della Costituzione sono liberamente esercitati anche per finalità di religione o di culto.

*Articolo 6.* 1. La libertà religiosa comprende il diritto di aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa e di recedere da essa, come anche il diritto di partecipazione, senza ingerenza da parte dello Stato, alla vita ed all'organizzazione della confessione religiosa di appartenenza in conformità alle sue regole.

2. Non possono essere posti in essere atti aventi lo scopo di discriminare, nuocere o recare molestia a coloro che abbiano esercitato tali diritti.

*Articolo 7.* 1. I cittadini hanno diritto di agire secondo i dettami imprescindibili della propria coscienza, nel rispetto dei diritti e doveri sanciti dalla Costituzione.

2. Le modalità per l'esercizio dell'obiezione di coscienza nei diversi settori sono disciplinate dalla legge.

*Articolo 8.* 1. L'appartenenza alle Forze armate, alla Polizia di Stato o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura e di assistenza, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non impediscono l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

*Articolo 9.* 1. I ministri di culto di una confessione religiosa sono liberi di svolgere il loro ministero spirituale.

2. I ministri di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, che compiono atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano, dimostrano la propria qualifica depositando presso l'ufficio competente per l'atto apposita certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza.

*Articolo 10.* 1. Coloro che intendono celebrare il matrimonio davanti ad

un ministro di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica devono specificarlo all'ufficiale dello stato civile all'atto della richiesta della pubblicazione prevista dagli articoli 93 e seguenti del codice civile. L'ufficiale dello stato civile, il quale ha proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione del matrimonio avrà luogo nel comune indicato dai nubendi, che essa seguirà davanti al ministro di culto indicato dai medesimi, che il ministro di culto ha comunicato la propria disponibilità e depositato la certificazione di cui all'articolo 9. Attesta inoltre che l'ufficiale dello stato civile ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi, dando ai medesimi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

2. Il ministro di culto, nel celebrare il matrimonio, osserva le disposizioni di cui agli articoli 107 e 108 del codice civile omettendo la lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. Lo stesso ministro di culto redige subito dopo la celebrazione l'atto di matrimonio in duplice originale e allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

3. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione nei registri dello stato civile è fatta dal ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione all'ufficiale dello stato civile di cui al comma 1. Il ministro di culto ha l'obbligo di effettuare la trasmissione dell'atto non oltre i cinque giorni dalla celebrazione e di darne contemporaneamente avviso ai contraenti. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

4. Il matrimonio ha effetto dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omissso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

5. All'articolo 83 del codice civile le parole: «culti ammessi nello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «confessioni religiose aventi personalità giuridica».

6. Il presente articolo non modifica nè pregiudica le disposizioni che danno attuazione ad intese o accordi stipulati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

*Articolo 11.* 1. Gli alunni e i loro genitori possono chiedere ai competenti organi della scuola di svolgere, nell'ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile previste dall'ordinamento scolastico, libere attività complementari relative al fenomeno religioso e alle sue applicazioni, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite da tale ordinamento.

*Articolo 12.* 1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e le collette effettuate all'interno e all'ingresso dei rispettivi luoghi o edifici di culto avvengono liberamente.

## Capo II

### *Confessioni e associazioni religiose*

*Articolo 13.* 1. La libertà delle confessioni religiose garantita dalle norme costituzionali comprende, tra l'altro, il diritto di celebrare i propri riti, purchè non siano contrari al buon costume; di aprire edifici destinati all'esercizio del culto; di diffondere e fare propaganda della propria fede religiosa e delle proprie credenze; di formare e nominare liberamente i ministri di culto; di emanare liberamente atti in materia spirituale; di fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti; di comunicare e corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose; di promuovere la valorizzazione delle proprie espressioni culturali.

*Articolo 14.* 1. La confessione religiosa o l'ente esponenziale che la rappresenta può chiedere di essere riconosciuta come persona giuridica agli effetti civili. Il riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi degli articoli 15 e 16.

*Articolo 15.* 1. La domanda di riconoscimento è presentata al Ministro dell'interno unitamente allo statuto ed alla documentazione di cui all'articolo 16.

2. La domanda di riconoscimento può essere presa in considerazione solo se la confessione o l'ente esponenziale ha sede in Italia e se è rappresentata, giuridicamente e di fatto, da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.

*Articolo 16.* 1. Dallo statuto o dalla documentazione allegata alla domanda di riconoscimento devono risultare, oltre alla indicazione della denominazione e della sede, le norme di organizzazione, amministrazione e funzionamento e ogni elemento utile alla valutazione della stabilità e della base patrimoniale di cui dispone la confessione o l'ente esponenziale in relazione alle finalità perseguite. Il Consiglio di Stato, nel formulare il proprio parere anche sul carattere confessionale del richiedente, accerta, in particolare, che lo statuto non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano e non contenga disposizioni contrarie ai diritti inviolabili dell'uomo.

*Articolo 17.* 1. La confessione religiosa o l'ente esponenziale che ha ottenuto la personalità giuridica deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche. Nel registro, con le indicazioni previste dagli articoli 33 e 34 del codice

civile, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza della persona giuridica. Decorsi i termini previsti dall'articolo 27 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, la confessione o l'ente può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.

*Articolo 18.* 1. Le modificazioni allo statuto della confessione religiosa o dell'ente esponenziale che abbiano ottenuto la personalità giuridica devono essere comunicate al Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere alla confessione o all'ente uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento è stato concesso, il riconoscimento della personalità giuridica è revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.

*Articolo 19.* 1. Per gli acquisti delle confessioni religiose o dei loro enti esponenziali che abbiano ottenuto la personalità giuridica si applicano le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti delle persone giuridiche.

*Articolo 20.* 1. Le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti ecclesiastici, nonché in tema di disciplina urbanistica dei servizi religiosi, di utilizzo dei fondi per le opere di urbanizzazione secondaria o comunque di interventi per la costruzione, il ripristino, il restauro e la conservazione di edifici aperti all'esercizio pubblico del culto, possono essere applicate alle confessioni religiose aventi personalità giuridica che abbiano una presenza organizzata nell'ambito del comune. L'applicazione delle predette disposizioni ha luogo, tenuto conto delle esigenze religiose della popolazione, sulla base di intese tra le confessioni interessate e le autorità competenti.

2. Gli edifici di culto costruiti con contributi regionali o comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo. L'atto da cui trae origine il vincolo, redatto nelle forme prescritte, è trascritto nei registri immobiliari. Gli atti e i negozi che comportano violazione del vincolo sono nulli.

*Articolo 21.* 1. Associazioni e fondazioni con finalità di religione o di culto possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con le modalità ed i requisiti previsti dal codice civile. Alle stesse si applicano le norme relative alle persone giuridiche private, salvo quanto attiene alle attività di religione o di culto.

*Articolo 22.* 1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di lire due

milioni a favore delle confessioni religiose aventi personalità giuridica o del loro ente esponenziale, iscritti in apposito elenco istituito presso il Ministero dell'interno.

2. Con appositi regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta rispettivamente del Ministro dell'interno e del Ministro delle finanze sono disciplinate:

a) le condizioni e le modalità per l'iscrizione nell'elenco, anche con riferimento alla destinazione delle erogazioni;

b) le modalità della deduzione, delle erogazioni e dei relativi controlli, con particolare riguardo all'effettiva acquisizione delle entrate da parte dei beneficiari ed all'utilizzazione delle somme ricevute.

*Articolo 23.* 1. Agli effetti tributari le confessioni religiose aventi personalità giuridica o i loro enti esponenziali aventi fine di religione, credenza o culto, come anche le attività dirette a tali scopi, sono equiparati agli enti ed alle attività aventi finalità di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione, credenza o culto da essi svolte restano soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime.

*Articolo 24.* 1. Agli effetti civili, si considerano comunque:

a) attività di religione credenza o culto quelle dirette all'esercizio del culto e dei riti, alla cura delle anime, alla formazione di ministri di culto, a scopi missionari e di diffusione della propria fede ed alla educazione religiosa;

b) attività diverse da quelle di religione, credenza o culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

*Articolo 25.* 1. I ministri di culto delle confessioni religiose che hanno ottenuto la personalità giuridica, aventi cittadinanza italiana e che siano residenti in Italia, possono iscriversi al fondo di previdenza istituito con legge 22 dicembre 1973, n. 903, e successive modificazioni, sulla base delle procedure e con le modalità previste dalla legge stessa.

### Capo III

#### *Stipulazione di intese*

*Articolo 26.* 1. Le confessioni religiose organizzate secondo propri statuti non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano, le quali chiedono che i loro rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese ai sensi

dell'articolo 8 della Costituzione, presentano la relativa istanza, unitamente alla documentazione e agli elementi di cui all'articolo 16, al Presidente del Consiglio dei ministri.

*Articolo 27.* 1. Se la richiesta è presentata da una confessione religiosa non avente personalità giuridica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica la richiesta al Ministero dell'interno perchè verifichi che lo statuto della confessione religiosa non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano. A tal fine il Ministro dell'interno acquisisce il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 16.

*Articolo 28.* 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisite le necessarie valutazioni, prima di avviare le procedure di intesa, invita la confessione interessata a indicare chi, a tal fine, la rappresenta.

*Articolo 29.* 1. Il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale delega il Sottosegretario di Stato, segretario del Consiglio dei ministri, per la conduzione della trattativa con il rappresentante della confessione interessata, sulla base delle valutazioni espresse e delle proposte formulate dalla commissione di studio di cui all'articolo 30.

2. Il Sottosegretario di Stato, conclusa la trattativa, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, con propria relazione, il progetto di intesa.

*Articolo 30.* 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, una commissione di studio con il compito di predisporre un progetto per le trattative ai fini della stipulazione dell'intesa.

2. La commissione di cui al comma 1 è composta dal direttore generale degli affari dei culti presso il Ministero dell'interno e da funzionari delle amministrazioni interessate con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparato, nonchè da altrettanti esperti cittadini italiani, designati dalla confessione religiosa interessata. Il presidente della commissione è scelto tra le categorie indicate dall'articolo 29, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

*Articolo 31.* 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone il progetto di intesa alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera l), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e informa, quindi, il Parlamento sui principi e sui contenuti del progetto stesso.

*Articolo 32.* 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora si renda necessario in relazione alle osservazioni, ai rilievi e agli indirizzi emersi in seno al Consiglio dei ministri o in sede parlamentare rimette il testo al Sottosegretario di Stato per le opportune modifiche al progetto di intesa.

2. Anche in ordine al nuovo progetto si procede secondo quanto previsto dagli articoli 29 e 31.

*Articolo 33.* 1. Concluse le procedure per la stipulazione dell'intesa, il

Presidente del Consiglio dei ministri firma l'intesa stessa con il rappresentante della confessione religiosa.

*Articolo 34.* 1. Il disegno di legge di approvazione dell'intesa che disciplina i rapporti della confessione religiosa con lo Stato è presentato al Parlamento con allegato il testo dell'intesa stessa.

*Articolo 35.* 1. Per l'applicazione di disposizioni di legge relative a specifiche materie che coinvolgono rapporti con lo Stato delle singole confessioni religiose aventi personalità giuridica, si provvede, ove previsto dalla legge stessa, con decreti del Presidente della Repubblica previa intesa con la confessione che ne faccia richiesta.

#### Capo IV

##### *Disposizioni finali e transitorie*

*Articolo 36.* 1. Le confessioni religiose e gli istituti di culto riconosciuti ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159, conservano la personalità giuridica. Ad essi si applicano le disposizioni della presente legge. Essi devono richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 17, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Articolo 37.* 1. I ministri di culto, la cui nomina sia stata approvata ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sino a quando mantengono la qualifica loro riconosciuta conservano il regime giuridico e previdenziale loro riservato dalla predetta legge, dal regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, e da ogni altra disposizione che li riguarda.

*Articolo 38.* 1. Le confessioni religiose che siano persone giuridiche straniere restano regolate dall'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale. Ove abbiano una presenza sociale organizzata in Italia e intendano essere riconosciute ai sensi della presente legge, esse devono presentare domanda di riconoscimento della personalità giuridica alle condizioni e secondo il procedimento previsti dalle disposizioni di cui al capo II.

*Articolo 39.* 1. Le norme della presente legge non modificano nè pregiudicano le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2. La presente legge non modifica e non pregiudica le disposizioni di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

*Articolo 40.* 1. Sono abrogati la legge 24 giugno 1929, n. 1159, ed il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

*Articolo 41.* 1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22, valutate in lire 800 milioni per l'anno 1998, in lire 5.200 milioni per l'anno 1999 ed in lire 3.400 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede per gli anni 1988 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.